

Salt somos todos

LA VANGUARDIA, Editorial, 28.02.10

EL clima de inseguridad que viven los vecinos de la localidad gerundense de Salt ha provocado un debate sobre la relación entre los efectos de la crisis económica y la convivencia en los pueblos y ciudades de Catalunya con un alto porcentaje de personas inmigrantes. La alta tensión de los últimos días en Salt, perceptible en calles y plazas, indica que estamos ante un desafío importante que reclama acciones urgentes, así como políticas eficientes a medio y largo plazo. La alcaldesa, Iolanda Pineda, ha pedido a la administración autonómica y central "recursos excepcionales para una situación excepcional", una llamada que, sin duda, debe ser atendida con diligencia. Salt, con un 43% de población de origen inmigrante, es la punta del iceberg del cambio demográfico que nuestro país ha experimentado en los últimos diez años. Alcaldes de otras localidades también se han manifestado en el mismo sentido, alertando sobre el impacto negativo de la recesión y el paro.

Hace una semana, las páginas de La Vanguardia recogían un realista y documentado debate sobre la inmigración a cargo de cinco ediles de distinto signo político, entre ellos, la alcaldesa socialista de Salt. Decíamos entonces que los derechos y los deberes de todos los ciudadanos, recién llegados y autóctonos, deben armonizarse con una constante labor de mediación y acompañamiento que se anticipe a los rumores incendiarios y al estallido de brotes violentos, sobre todo allí donde hay más riesgo de aparición de guetos. La crisis golpea seriamente las capas de población más vulnerables, y ello incide especialmente sobre los núcleos con mayor concentración de inmigrantes, dedicados a los trabajos más precarios. Es fácil, en este

contexto, que los malestares y los agravios se acumulen en las diferentes comunidades que conviven en un mismo y determinado espacio. La inseguridad opera como espoleta, como ha ocurrido en Salt, pese a las inversiones y las acciones desarrolladas por el Ayuntamiento para asegurar, precisamente, la cohesión social y evitar la exclusión.

El Govern de la Generalitat y el Gobierno central no pueden dejar solo al Ayuntamiento de Salt ante un reto de esta magnitud. Deben comprometerse en el abordaje global de este problema, con medios y recursos. Salt somos todos. Por ello, el primer objetivo es devolver la seguridad a las calles de Salt, donde ha crecido el número de los robos con fuerza y otros delitos de violencia extrema. Esta tarea policial debe ir acompañada de mediación inteligente y llamadas a la calma, de autoridades y asociaciones, que desactiven los elementos que, dentro de cada comunidad, se dedican a encender los ánimos de manera irresponsable.

El segundo objetivo es poner fin a la impunidad de los que delinquen repetidamente, sea cual sea su origen; ahora se ha dado a conocer que cinco de los ocho reincidentes fichados por los Mossos en Girona viven en Salt. Debe ponerse en marcha de inmediato el llamado registro de faltas, previsto desde el 2003, y deben introducirse las reformas necesarias para endurecer las penas para determinados delitos. El tercer objetivo es incrementar las inversiones estratégicas - desplazando recursos de otros objetivos secundarios y siendo más austeros en el gasto-en aquellas áreas que refuerzan la integración y la cohesión: vivienda, educación y servicios sociales. En Salt, como en otros lugares, nos jugamos el mayor bien del país: la convivencia. Estando hoy al lado de Salt prevenimos la fractura social.